

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2013

Anexo al ORDEN DEL DÍA N° 601

Impreso el día 2 de octubre de 2013

SUMARIO

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014. (C.D.-56/13.)

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el proyecto de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-56/13 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su rechazo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del reglamento del Honorable Senado, pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 2 de octubre de 2013.

Jaime Linares.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al

año 2014; luego de un profundo estudio aconseja su rechazo.

La Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación en su artículo 75, inciso 8, la potestad de "fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el Presupuesto General

de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión".

En uso de estas facultades, a continuación se analizan los principales aspectos que motivan el rechazo del proyecto del Poder Ejecutivo debido a las siguientes consideraciones:

1. Sobre los supuestos macroeconómicos

Existen sobradas inconsistencias en las proyecciones de las variables macroeconómicas expuestas en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2014 presentado por el Poder Ejecutivo nacional. Pero no sólo en las variables proyectadas para 2014 sino también en los cálculos para el presente año, claramente sobreestimados en el caso del PIB y demás variables reales y subestimados en el caso de la variación de los distintos precios incluido el tipo de cambio.

La primera de las inconsistencias para el año entrante se observa en la dinámica de las principales variables macroeconómicas creciendo nominalmente por encima del 20 % interanual y una pauta oficial de precios minoristas del 10,4 % promedio para 2014.

Por otro lado, es la primera vez en años, que se prevé un crecimiento real del PIB del 6,2 %. En los presupuestos correspondería proyectar un crecimiento del PIB en torno al crecimiento del PIB potencial de la economía, entendido como el que surge del normal uso de los factores productivos y la productividad de la economía (en el caso de la Argentina el PIB potencial rondaría entre el 3 % y el 4 %). Sólo en el caso de tener una significativa abundancia de recursos ociosos de capital y trabajo, que no es el caso actual de la Argentina, es que puede proyectarse una tasa de crecimiento significativamente superior al potencial. En consecuencia la tasa de crecimiento del PIB de 6,2 % debería estar correcta y rigurosamente justificada. Adicionalmente es muy probable que la productividad total de los factores en lugar de haber aumentado haya disminuido en los años recientes debido a las crecientes distorsiones de precios relativos producto de las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional en los últimos años en distintos mercados. Por su parte, los factores externos, los términos de intercambio,

el crecimiento de nuestros socios comerciales, las condiciones financieras internacionales, los cambios esperados en la política monetaria de los países centrales (particularmente la Reserva Federal de los Estados Unidos que preanuncia subas en las tasas de interés internacionales), la desaceleración de los precios de los *commodities* y los menores flujos de capitales hacia las economías emergentes, todo lo cual afectaría sus tasas de crecimiento y consecuentemente la demanda de productos argentinos, no parecen en esta oportunidad contribuir a una tasa de crecimiento elevada de la actividad económica argentina. En síntesis, se hace prácticamente inverosímil la proyección del PIB incluida en el presupuesto para el año 2014.

Otra de las inconsistencias relacionada con el 6,2 % de crecimiento del PIB es el crecimiento real de las importaciones del 8,6 % interanual. La historia económica argentina no muestra ningún caso de semejante crecimiento del PIB con tan escaso crecimiento de las importaciones, a saber, la elasticidad producto de las importaciones que se obtiene del actual presupuesto es de 1,39, e históricamente con un crecimiento del PIB superior al 5 % la elasticidad producto de las importaciones siempre superó largamente la cifra de 3. Es decir, dada la inextricable relación entre crecimiento del PIB y de las importaciones, postular una tasa de crecimiento del PIB de 6,2 % estaría asociado a un crecimiento de las importaciones no inferior al 20 % interanual.

Dado el contexto internacional y local, no hay condiciones para que las exportaciones crezcan 9,2 % a/a en términos reales. A saber, no se puede repetir la tasa de crecimiento de la cosecha de granos del corriente año respecto al año anterior, existe un creciente déficit energético, y un estancamiento en las exportaciones de las manufacturas de origen industrial debido a una moderada recuperación prevista en la economía brasileña que es uno de nuestros principales socios comerciales.

Según el presupuesto 2014 el tipo de cambio promedio va a ser 6,33 \$/u\$s para 2014, esto implicaría una depreciación nominal del peso del 16 % anual, muy por debajo de la variación de las proyecciones de variables nominales del presupuesto. Esto muestra nuevamente una inconsistencia implícita o en la tasa de depreciación

ción proyectada o en las tasas nominales de las variables. Por otro lado, la proyección del tipo de cambio nominal resulta inferior a cualquier cotización del dólar futuro al presente (septiembre 2013) dada la acelerada depreciación del peso ocurrida en lo que va del año. Todo esto nos lleva a pensar que la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal 2014/2013 está subestimada.

La sobrestimación de las exportaciones, la subestimación de las importaciones para la tasa de crecimiento del PIB pauta, hacen altamente improbable cumplir con el saldo comercial previsto en el proyecto de ley de presupuesto 2014.

2. Sobre la situación fiscal

La inconsistencia de los supuestos macroeconómicos, torna poco probables las proyecciones de recursos, gastos y resultado financiero. En primer lugar cabe consignar que las estimaciones fiscales para 2013 resultan por demás optimistas, particularmente en el rubro gastos que se encuentra subestimado: estimamos que el resultado fiscal del sector público no financiero se encuentra sobreestimado en más de \$ 20.000 millones para el corriente año. Este déficit, que debería ser el punto de partida para las proyecciones fiscales del presupuesto, no sólo no es reconocido en el proyecto del Poder Ejecutivo nacional sino que constituye una alarma para el futuro fiscal de la Argentina que se encuentra en un sendero inequívocamente no sustentable.

En el mismo sentido, el resultado primario de la administración pública nacional se estima en \$ 78.116,5 millones para el año 2014, lo que implica 2,41 puntos del PIB. Este resultado primario, además de ser ficticio porque contiene rentas de la propiedad del BCRA y la ANSES las cuales no deberían estar incluidas como ingresos corrientes porque son fuentes de financiamiento, pasa de un déficit de -0,01 en 2013 a un superávit de 2,41 como porcentaje del PIB; esto implica una política de ajuste fiscal fuerte porque el mayor superávit se logra a partir de un menor crecimiento del gasto y una mayor presión tributaria, combinación que extrae recursos al sector privado disminuyendo la demanda agregada de la economía. Además, este ajuste fiscal que como dijimos implicaría un fuerte impulso fiscal negativo a la demanda

agregada, constituye un factor adicional que hace aún más inverosímil la proyección de 6,2 % para el PIB.

Queremos resaltar que al incluir el Poder Ejecutivo nacional en el rubro Recursos corrientes a las rentas de la propiedad de la ANSES están descapitalizando el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), supuestamente creado para garantizar el pago de las jubilaciones futuras y no para financiar gastos corrientes.

El proyecto de presupuesto 2014 prevé ingresos totales para la administración nacional por \$ 860.411,6 millones, en función a una variación de precios que nosotros estimamos más elevada y una variación real del PIB que calculamos está sobrestimada.

A su vez, los gastos totales de la administración nacional previstos por el Poder Ejecutivo nacional ascenderían a \$ 859.542,7 millones en 2014. En base a la subestimación de la variación de precios ya mencionada, a la no incorporación en el presupuesto de aumentos salariales y a una notable reducción en la tasa de crecimiento presupuestada de los gastos de capital, lo más probable es que las erogaciones totales sean mayores a las previstas.

Queremos destacar tres cuestiones en materia de gastos:

i) La continuidad de altos niveles de subsidios, exenciones impositivas y de gasto tributario que son otorgados a diferentes sectores de la sociedad, ameritan que sea este Honorable Congreso de la Nación quien estudie la conveniencia, racionalidad y sustentabilidad económica de este complejo y delicado esquema que año tras año aumenta su incidencia en las cuentas fiscales.

ii) Seguimos insistiendo al igual que en años anteriores, que el proyecto de ley de presupuesto no prevé ningún cambio para hacer "realmente universal" la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo para cubrir al total de niñas, niños y a las embarazadas.

iii) El proyecto de presupuesto 2014 tiene previsto aumentos en variados ítems de gasto público social como salud (10,9 %), educación y cultura (11,4 %), vivienda y urbanismo (7,1 %) o agua potable y alcantarillado (8,4 %) que están por debajo de la propia inflación presupuestada

según el índice de precios implícitos del PIB (15,3 %), más allá que esta variación de precios del deflactor del PIB y más aún la variación proyectada del IPC sean sistemáticamente muy inferiores a la inflación real no medida desde inicios de 2007 por el INDEC. En consecuencia, el presupuesto supone una reducción en términos reales del gasto público dirigido a los sectores más postergados y vulnerables de nuestra sociedad.

Como viene sucediendo desde hace varios años atrás, el proyecto de presupuesto 2014 prevé prácticamente un equilibrio fiscal para la administración pública nacional (pequeño superávit financiero de casi 0,03 % del PIB), y como mencionamos anteriormente, de alcanzarse estos resultados significarían un ajuste fiscal más que significativo dado el resultado negativo previsto para el presente año. De todos modos estimamos altamente improbable que en 2014 se alcancen los resultados presupuestados teniendo en cuenta la débil dinámica de la actividad económica y la no modificación de las políticas fiscales por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo nacional. Esto muestra otra vez las inconsistencias y contradicciones en las proyecciones de las variables macroeconómicas.

Otro punto importante es que el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo nacional revela una presión tributaria nacional de 33,83 % para 2014. Según esta pauta el contribuyente continúa pagando cada año más impuestos en una estructura tributaria con sesgo regresivo y exenciones a sectores concentrados y de altos ingresos.

3. Reafirmación de las potestades del Honorable Congreso en materia presupuestaria

En sintonía con las posiciones sostenidas en el ámbito parlamentario sobre las atribuciones del jefe de Gabinete en materia presupuestaria (reasignaciones mediante el artículo 37 de la ley 24.156) y de la Presidencia con respecto a las ampliaciones del presupuesto por medio de decretos de necesidad y urgencia, sostenemos que:

i) Quedarán reservadas al Congreso de la Nación las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones

financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades y un incremento de las partidas referidas a los gastos reservados y de inteligencia.

ii) Los excedentes de recursos cualquiera fuera su origen, incluidos aquellos provenientes de la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento no previstos al momento de la aprobación del presupuesto anual de recursos y gastos de la administración nacional, tendrán su asignación y destino en un 5 % según decisión del Poder Ejecutivo nacional y será facultad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación fijar el uso del 95 % restante del excedente.

4. Compromiso con el 82 % móvil para los jubilados y pensionados, y el pago de las deudas previsionales

Reafirmamos la posición sostenida en el ámbito parlamentario con relación a la suba del haber previsional mínimo a una cifra equivalente al 82 % del salario mínimo vital y móvil. Asimismo, proponemos eliminar el límite presupuestado por el Poder Ejecutivo para el pago de sentencias por reajustes de haberes. La ANSES deberá pagar las deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa por hasta las sumas necesarias efectuando las modificaciones presupuestarias a tal fin.

En el artículo 40 del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo nacional, la previsión de pago de los juicios previsionales de 6.500.000.000 de pesos, siempre que se cumpliera, cubriría aproximadamente unos 60.000 juicios. Es decir cerca del 10 % del total de los juicios pendientes de pago. Una deuda interna más que quedará pendiente.

5. Relación de la Nación con las provincias

La participación de las provincias en el reparto de la recaudación tributaria nacional ha venido cayendo año tras año, para este año en curso de enero a agosto de 2013 los fondos destinados a provincias es apenas al 25,6 % del total recaudado. El debate acerca del cumplimiento de la garantía del 34 % establecida por el artículo 7° de la ley 23.548, de coparticipación federal no ha sido saldado.

En este contexto, consideramos necesario fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos provinciales mediante una mayor

asignación de fondos a distribuir de manera automática y con criterios objetivos establecidos por ley. Es hora de abandonar criterios de discrecionalidad y centralismo fiscal, por un nuevo esquema de federalismo fiscal.

Seguimos insistiendo en que el Poder Ejecutivo nacional debe actualizar los importes a remitir en concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002 ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias que no participan de la reprogramación de la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo.

Por otra parte en 1992 se firmó el llamado Pacto Fiscal I, que estableció la sesión del 15 % de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional nacional, que en ese momento presentaba un gran déficit. Al año siguiente buscando una prórroga para este pacto, se firmó un segundo pacto, Pacto Fiscal II, el cual incluyó el compromiso de la Nación de aceptar la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al sistema nacional.

Este hecho marcó conflictos entre la Nación y las provincias que no transfirieron las cajas provinciales. En respuesta, la Nación y los gobernadores suscribieron el Compromiso Federal ratificado por ley nacional 25.235, que en su artículo 12, establece:

"El Estado nacional financiará con recursos provenientes de rentas generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes [...] Las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias, si así lo desearan [...]. El Estado nacional financiará los déficits en forma escalonada y acumulativa en los siguientes porcentajes: para el año 2000 el 5 %, el 2001 el 20 % del déficit anual del sistema previsional de cada provincia.-[...] Se completará hasta llegar al 100 % la atención por parte del Estado nacional de los déficits fiscales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, en los tres años subsiguientes". Santa Fe suscribe este compromiso. En la sus-

cripción se acordó el financiamiento del 5 % en el año 2000, 25 % en el año 2001, 50 % en el año 2002, 75 % en el año 2003, 100 % del 2004 en adelante.

Estudios realizados concluyen que la provincia de Santa Fe es la única provincia con la que la Nación ha incumplido totalmente con el acuerdo de financiamiento. Ante este incumplimiento y ante la falta de toda respuesta a sus reclamos, la provincia de Santa Fe ha optado por realizar una presentación en la Corte Suprema de Justicia señalando la ilegitimidad de la detracción del 15 % de la masa coparticipable para financiar a la ANSES, alegando la desaparición de la causa que motivó esa cesión, que fue afrontar el déficit del sistema previsional y no para el sostenimiento de la ANSES, y que el último acuerdo que prorrogaba los pactos fiscales, se había vencido el 31 de diciembre de 2005, no firmando la provincia ningún consentimiento para que se le sigan detrayendo fondos de la coparticipación con ese motivo. Aún no hubo pronunciamiento de la Corte al respecto.

Por lo expuesto, solicitamos la incorporación de un artículo que suspenda para este ejercicio fiscal la detracción del 15 % de la masa de impuestos coparticipables, ya que el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe que debió ser cubierto por la Nación asciende a más de \$ 1.000 millones.

En el caso de la provincia de Córdoba el proyecto 5.333-D.-12 solicita se derogue el descuento del 15 % de la masa coparticipable, lo que cambiaría sustancialmente la situación de las provincias recuperando solvencia económica.

Una consideración especial merece la obra pública, donde de la lectura de la planilla plurianual de contratación de obras, se aprecia que Santa Fe continúa siendo postergada para la ejecución de nuevas obras, del total asignado para 2014 de \$ 3.861.029.653, la provincia de Santa Fe recibirá el 4,5 %, que representa la mitad de lo que le correspondería si se aplicaran los índices de coparticipación; y además la asignación presupuestaria a cada obra no supera el 1 % del total presupuestado lo que pareciera una asignación meramente simbólica.

Por último, y no menos importante, solicitamos la inclusión en el presupuesto nacional del aval para el endeudamiento externo

solicitado por la provincia de Santa Fe para obtener crédito de Fondo Kuwaití, es un requisito de la ley de administración financiera. El mencionado crédito será utilizado para la construcción del acueducto Noreste 2 el cual implicará beneficios para las ciudades de los departamentos de General Obligado y Vera y solucionará el crónico problema del faltante de agua potable en el norte provincial. El crédito ya se encuentra concedido por Kuwait, es a 20 años de plazo, más cuatro de gracia, y al 3,5 por ciento de interés anual. Estamos a la espera de que el Ministerio de Economía de la Nación nos dé la no objeción de la ley de responsabilidad y reclamamos la incorporación del aval de la Nación.

En el caso de la provincia de Córdoba, la de la ruta nacional 19 es un buen ejemplo que demuestra cómo no se ejecuta lo presupuestado en obras. Desde el año 2012 se viene teniendo en cuenta esta obra en el presupuesto y este año se ha presupuestado por un valor que no supera los 4 km. de autovía conforme a los valores publicados por *El Constructor*, revista avalada por la Cámara Argentina de la Construcción.

6. Otros aspectos destacados

i) Artículo 12: universidades nacionales

Se asignan \$ 29.208 millones a las universidades nacionales, cifra menor a la solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir las necesidades de las universidades públicas. Si bien existe un aumento nominal, éste incluye los aumentos salariales esperados para el año 2014 los cuales no eran incluidos con anterioridad en el presupuesto.

La distribución por cada universidad no responde a criterios objetivos como podría ser cantidad de alumnos, número de investigadores, promoción territorial, promoción de carreras orientada a una estrategia de desarrollo, etc. Se hace discrecionalmente con la exclusión del Congreso de la Nación. Se reemplaza la tradicional planilla B por una partida global que incluye un monto global y su asignación es potestad del Poder Ejecutivo de la Nación. Ratificamos la necesidad de transparentar la asignación de recursos a las universidades en base a criterios fijados para promover una estrategia de desarrollo integral.

ii) Artículo 15, 19, 30, 31, 36, 52: déficit energético

El Estado nacional tomará a su cargo deudas consolidadas con Yacypetá, Salto Grande y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) por diferenciales de precios liquidados en operaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) hasta el 31/12/2014. Además, se autoriza al Ministerio de Economía de la Nación a incrementar el fondo argentino de hidrocarburos por hasta u\$s 2.000 millones. Por otro lado, se exime de impuestos a los combustibles a las importaciones de gasoil, diésel oil, naftas de grado dos y grado tres, y asimismo, se autoriza a importar 7.000.000 m³ y 1.000.000 m³ respectivamente. Por su parte, se exime de impuestos a la importación de bienes de capital destinados a la inversión para obras de infraestructura de energía eléctrica crítica y prioritaria. Por último queremos destacar que se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir letras del Tesoro por \$ 14.000 millones para ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, importación de energía eléctrica, adquisición de aeronaves o bienes de capital para proyectos y obras públicas nacionales.

En el caso de la generación de deudas no se da cuenta de las condiciones efectivas en las cuales éstas serán asumidas y en algunos casos ni se mencionan los montos previstos. Por ello afirmamos que cualquier deuda que sea asumida por el Tesoro de la Nación debe ser transparentada al Congreso nacional, e informar acerca de: a) las premisas bajo las cuales se contrajeron; b) los objetivos de política pública perseguidos; c) los responsables de la gestión; y d) las medidas adoptadas para no reincidir en la acumulación de deudas en ejercicios futuros.

En el caso del Fondo Argentino de Hidrocarburos no queda clara la afectación, los objetivos de las inversiones y las políticas a implementar para asegurar el resguardo del fondo. Además claramente se observa que el déficit energético es creciente porque para el presupuesto 2012 la importación de gas y diésel oil era de 3.500.000 m³ y para el presupuesto 2014 se solicitan autorizar 7.000.000 m³; y en el caso de las naftas para el presupuesto 2013 se solicitaba autorizar importación por 200.000 m³ y para el presupuesto 2014 se están solicitando 1.000.000 m³, cinco veces más.

En el marco del fuerte déficit energético argentino que impacta cada vez más hondo en las finanzas públicas, en la producción y en el balance comercial, el objetivo perseguido es poder evaluar la sustentabilidad de las operaciones de subsidios, de deudas contraídas y de autorizaciones de importaciones que se llevaron y que se llevarán a cabo en el área energética.

iii) *Artículo 16: Ley de Bosques*

El proyecto del Poder Ejecutivo asigna al Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos la suma de \$ 230 millones en virtud del artículo 31 de la ley 26.331 y \$ 17 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques.

El inciso a) del artículo 31 de la ley 26.331 señala que: "Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3 % del presupuesto nacional". Si realizamos el cálculo de este inciso, lo que se debería destinar al fondo para 2014 sería como mínimo de \$ 2.579 millones.

iv) *Artículo 17: Aerolíneas Argentinas y Austral*

El proyecto oficial renueva la autorización al Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades financieras por déficits operativos, inversiones y tratamiento de pasivos de Aerolíneas Argentinas y Austral derivados de la aplicación de la ley 26.466 (expropiación). En el supuesto del tratamiento de los pasivos y de ser necesario, se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a emitir nuevos instrumentos de deuda para su atención.

Como se mencionó anteriormente, este artículo autoriza al Poder Ejecutivo nacional a emitir deuda pública adicional para atender pasivos sin informar previamente al Honorable Congreso acerca de los montos ni de las condiciones en las cuales esas deudas serán asumidas. El Poder Ejecutivo nacional debe cumplir con las disposiciones del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, 24.156, que indica que como mínimo la ley de presupuesto debe tener las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas: a) tipo de deuda, b) monto máximo autorizado, c) plazo mínimo de amortización, y d) destino del financiamiento.

v) *Artículo 29: Fondo Anticíclico Fiscal (FAF)*

Se prorroga la suspensión de la integración del Fondo Anticíclico Fiscal. Para garantizar la

sustentabilidad fiscal debe constituirse el FAF en la fase expansiva del ciclo económico, esto es, cuando los recursos fiscales están creciendo. Estos superávits además de garantizar la sustentabilidad fiscal constituyen una parte esencial de la política económica integral destinada a reducir la volatilidad macroeconómica.

Esta regla fiscal se encuentra incluida en la propuesta macroeconómica de la plataforma programática del Frente Amplio Progresista, cito: "...una política fiscal que garantice la sustentabilidad fiscal intertemporal y que a la vez constituya una herramienta de política anticíclica". Creemos prudente desarrollar una nueva "regla fiscal" que involucre a la Nación, las provincias y municipios.

vi) *Artículo 34: Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)*

Este artículo exime del impuesto a la ganancia mínima presunta y del impuesto a las ganancias a AySA y a su vez se le condona el pago de las deudas generadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley de presupuesto en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta y del impuesto a las ganancias.

Solicitamos se agregue al artículo 34 del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo nacional a la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), para otorgarle el mismo tratamiento debido a que por su naturaleza es semejante a Aguas y Saneamientos Argentinos.

vii) *Artículos 71, 73 y 74: fideicomisos y Fondo Nacional de Desarrollo*

En estos artículos se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a crear, constituir o participar de fideicomisos y a crear el Fondo Nacional de Desarrollo de Proyectos Estratégicos con el objetivo de promover la competitividad de la industria azucarera, de fomentar la exportación de productos de fabricación nacional y para la facilitación del acceso al crédito del Programa de Desarrollo Rural de Agricultura Familiar.

Proponemos que estos proyectos tengan un trámite legislativo ordinario, es decir que se traten independientemente a la ley de presupuesto, para que se permita evaluar con más detenimiento la eficacia de los mismos.

Jaime Linares.